

Pasos hacia una paz sostenible

La voz de las personas desplazadas internas en el norte de Uganda

Mientras que la atención internacional se centra en las negociaciones que tienen lugar en Juba entre el gobierno de Uganda y el Ejército de Resistencia del Señor, las opiniones de las personas más afectadas por el conflicto hasta el momento no han sido debidamente escuchadas. Las investigaciones realizadas por Oxfam con personas desplazadas en el norte de Uganda destacan el hecho de que, aunque estas personas opinan que sus vidas han mejorado desde que comenzaron las negociaciones, siguen siendo pesimistas. A medida que avanzan las negociaciones, es fundamental abordar las preocupaciones de las personas del norte de Uganda respecto a la seguridad, la libertad de movimiento y el desarrollo como los pasos básicos hacia una paz justa y duradera.

Resumen

El proceso de paz que se viene desarrollando en Juba entre el gobierno de Uganda y el Ejército de Resistencia del Señor (LRA por las siglas en inglés), sobre cuyo éxito pesan las esperanzas de más de 2,7 millones de personas que viven en el norte de Uganda, parece que por fin está recibiendo apoyo internacional. Esta participación de la comunidad internacional resulta fundamental en este momento crítico de las negociaciones, que comenzaron en Juba en julio de 2006 como la mayor oportunidad de paz desde que comenzara la guerra hace ya más de dos décadas. Pero el camino hacia la paz sigue siendo precario, pues los conflictos suelen reanudarse en más del 50 por ciento de países dentro de los diez años siguientes de alcanzarse un primer acuerdo de paz.¹ Este informe pretende dar voz a las personas del norte de Uganda, en un intento por identificar los pasos hacia una paz justa y duradera. Se fundamenta en los resultados de discusiones con grupos focales integrados por 91 personas desplazadas internas, entrevistas con jefes de los campos y representantes del gobierno local, y una encuesta de 600 personas desplazadas internas en la región de Acholi. Las investigaciones fueron realizadas entre mayo y junio de 2007.²

Para muchas personas desplazadas internas (PDIs), el año pasado trajo un enorme cambio en sus vidas cotidianas. Un cincuenta y siete por ciento de las personas encuestadas afirma que la seguridad ha mejorado. Un cincuenta y seis por ciento afirma que tiene ahora mayor libertad de movimiento. A pesar de que la mayoría de las PDIs reconocía que eran los esfuerzos de paz del gobierno los que habían conseguido estas mejoras, la mayoría seguía no obstante teniendo dudas respecto al compromiso real a largo plazo del gobierno y del LRA para conseguir una paz duradera en la zona. Muchas opinan que no están representadas en, ni informadas sobre, el proceso de Juba, y no confían en que el gobierno vaya a fomentar el desarrollo y abordar la marginación que se percibe existe en el norte. Este sentimiento de desconfianza entre muchas de las PDIs emana de los muchos años de violencia sufridos, de los desplazamientos forzosos, y de la falta de alimentos y servicios en los campamentos en los que se ven obligadas a vivir.³

Esta sensación de enajenación tanto del proceso de Juba como del propio gobierno que sienten las personas desplazadas, así como la división que existe entre el norte y el sur del país, sólo podrán abordarse mediante una mayor participación de las comunidades afectadas tanto en el proceso de paz como en la elaboración de planes para la reconstrucción y el desarrollo del norte de Uganda. Durante las últimas semanas el gobierno de Uganda ha tomado medidas importantes para dirigir estos vacíos. Este informe ofrece importantes recomendaciones para escalar los esfuerzos siendo realizados. El acuerdo de paz al que puedan llegar todas las partes en el conflicto será tan sólo uno de los pasos hacia una paz sostenible para el norte de Uganda. Para alcanzar una paz justa y duradera, el gobierno de Uganda debe continuar asignando mayores recursos para mejorar la participación y el entendimiento de las comunidades con respecto al proceso de paz y a los planes de desarrollo, mejorar la situación de seguridad y apoyar un retorno voluntario y sostenible.

Los pasos hacia la paz

En base a la reciente encuesta realizada con las PDIs en el norte de Uganda, Oxfam recomienda que el gobierno y el LRA deben, con el apoyo de la comunidad internacional:

Mejorar la seguridad:

- Cumpliendo en forma permanente con el compromiso de alcanzar una solución pacífica al conflicto y de continuar observando plenamente el Acuerdo de Cese de Hostilidades entre el gobierno de Uganda y el LRA.
- Mediante la mejora en el rendimiento de las fuerzas de seguridad (tanto militares como policiales) en el norte de Uganda para reducir y evitar los casos de violencia sexual, el uso desproporcionado de la fuerza y los robos por parte de las fuerzas de seguridad, mediante:
 - la exigencia de una rendición de cuentas a los responsables;
 - la agilización del proceso de desmilitarización en la aplicación de la ley, así como el incremento de los sueldos y la mejora de la formación a los efectivos policiales;
 - una atención urgente, con medios no militares, a los problemas de paz, desarrollo y estado de derecho en Karamoja.

Permitir la participación de las comunidades afectadas por el conflicto en los procesos de paz y desarrollo, al:

- Continuar invirtiendo en la consulta de una amplia muestra de PDIs , entre ellas mujeres, grupos vulnerables y excombatientes del LRA, sobre el proceso de Juba y los planes para el desarrollo político y económico en el norte. Estas consultas deben ser descentralizadas y deben realizarse consistentemente a través de todo del proceso. Deben emitirse anuncios por radio, prensa y otros medios públicos para hacer llegar noticias e información sobre las negociaciones de paz de manera más efectiva a las comunidades afectadas.
- Aumentar los esfuerzos por desarrollar mecanismos de justicia alternativos que satisfagan las aspiraciones de las comunidades y cumplan las normas internacionales sobre la rendición de cuentas y la justicia. La Corte Penal Internacional y la comunidad internacional deben reconocer el deseo de paz de la mayoría de la población, ayudando a garantizar a la vez que todo acuerdo de paz incluya una estrategia exhaustiva sobre mecanismos transitorios de justicia.
- Priorizar la reinserción de excombatientes, por ejemplo a través de centros de consejería y rehabilitación para ex-LRA. Los países con una sólida experiencia en la reinserción, como puede ser el Reino Unido, deben velar por que la resinserción se vea apoyada durante y después de la etapa de transición, y por que se establezcan fondos tanto para las personas retornadas como para las comunidades receptoras.

Apoyar el retorno voluntario sostenible y los medios de vida factibles al:

- Promover la libertad de movimiento en todos los distritos afectados por el conflicto, tanto mediante la retirada de las restricciones de movimiento que aún siguen en pie a medida que así lo permita la situación de seguridad, y al asegurarse de no presionar a las PDIs a desplazarse de nuevo.
- Aportar mayor información a las PDIs sobre la situación de seguridad en sus aldeas de origen o asentamientos satélite; realizar evaluaciones sobre minas y demás artefactos sin explotar antes de producirse los retornos, en lugar de que sean las comunidades las que hayan de identificar los campos de minas; e incrementar las operaciones de desminado antes de que se produzcan las migraciones esperadas.
- Aportar ayuda dirigida especialmente a los sectores más vulnerables de la población que están menos preparados para la vida fuera de los campamentos de desplazados, como son las niñas y niños huérfanos, las viudas, las personas mayores y las personas discapacitadas. Esto podría incluir, sin que ello constituya una lista exhaustiva, ayuda para la construcción de refugios, creación de medios de vida alternativos, y protección del derecho a la tierra.
- Incrementar la cuantía de fondos asignados a la construcción y al mantenimiento de carreteras, para facilitar la ayuda humanitaria a comunidades aisladas y mejorar el acceso a los mercados.
- Desarrollar una estrategia relativa a la tierra que reduzca en lo posible el riesgo de conflictos por motivo de tenencia de la tierra. Dicha estrategia debe abarcar, como mínimo, mayor información pública sobre los derechos de los ciudadanos a la tierra y, siempre que sea posible, aportar títulos y demarcaciones dentro del sistema vigente de tenencia de la tierra, garantizando el acceso a la tierra para las mujeres, y en especial para las viudas y los hogares con niñas/os como cabezas de familia.

1. Introducción

Durante más de 20 años, el norte de Uganda ha venido sufriendo las consecuencias de un conflicto entre el gobierno de Uganda y el Ejército de Liberación del Señor (LRA), grupo rebelde que tuvo su origen en los movimientos de resistencia del norte formados a mediados de la década de los ochenta, como respuesta a la llegada al poder del actual presidente del país, Yoweri Museveni. El conflicto se ha degenerado en una cruenta insurrección que atenta directamente contra la población civil; entre las tácticas del LRA están el saqueo de aldeas, las masacres, las mutilaciones y el secuestro de niñas y niños que posteriormente se convierten en soldados o deben ejercer la esclavitud sexual. Según algunas estimaciones, más de 66.000 niñas, niños y personas jóvenes han sido secuestrados desde que comenzó el conflicto.⁴

En la década de los noventa, la respuesta del Gobierno a los ataques del LRA fue recluir a la población en decenas de campamentos protegidos, en los cuales permanecen hasta el día de hoy. En condiciones de hacinamiento, las personas de los campamentos han seguido sufriendo a manos del LRA pese a la presencia del ejército ugandés, las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF), que también ha sido acusado de cometer violaciones de derechos humanos.

Tras el inicio de una nueva ronda de negociaciones de paz entre el gobierno y el LRA en julio de 2006 en Juba, en Sudán, las partes firmaron un acuerdo de Cese de Hostilidades (CdH) que hizo renacer, para 1,8 millones de PDI, la esperanza de que volvería la paz al norte de Uganda. Hay un reconocimiento generalizado de que estas negociaciones son la mejor oportunidad para una paz sostenible surgida hasta la fecha, y un cauto optimismo de que podría conseguirse un acuerdo de paz integral.

Sin embargo, aunque se consiga un acuerdo, todavía quedarán enormes retos a superar en el terreno. Las personas entrevistadas en el curso de estas investigaciones han afirmado que efectivamente se han dado ciertas mejoras en las condiciones de vida en los campamentos desde que se firmó el acuerdo de CdH. Sin embargo, durante las entrevistas llevadas a cabo antes de que el gobierno emprendiera los esfuerzos actuales, las/los entrevistados demostraron un fuerte sentimiento de abandono diciendo que en las negociaciones de Juba no se habían tenido en cuenta sus opiniones, preocupaciones cotidianas, esperanzas o temores.

Un acuerdo de paz entre las partes en el conflicto será tan sólo un primer paso hacia un futuro de paz para el norte de Uganda. Por medio de este informe se quiere dar voz a las comunidades afectadas por el conflicto. El informe destaca la urgente necesidad de conseguir un

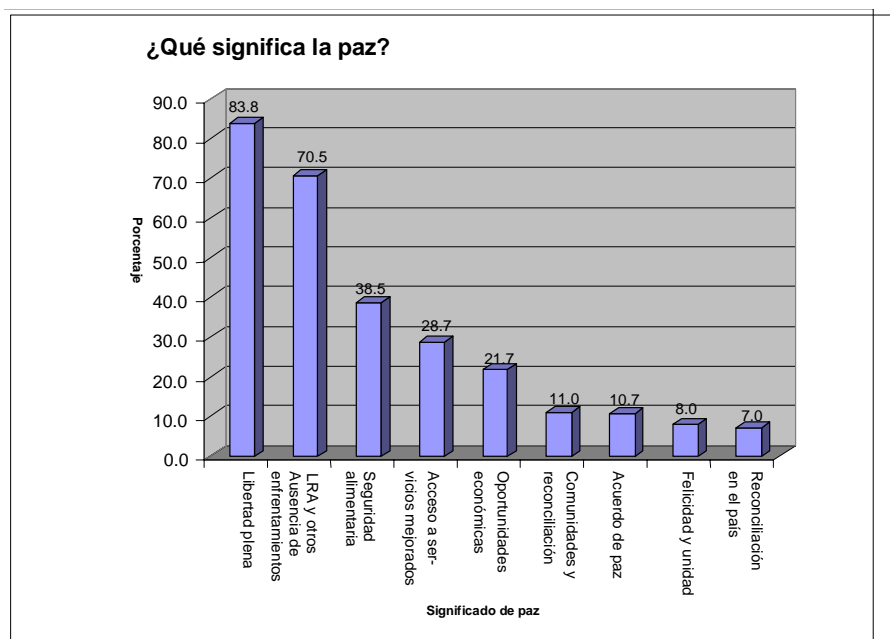
acuerdo de paz integral y, en base a las opiniones de las personas que viven en los campamentos y en los nuevos asentamientos, identifica algunos de los pasos más importantes para una paz duradera.

Qué significa la “paz” para las personas desplazadas internas (PDIs)

A pesar de las recientes mejoras en la situación de seguridad, un 45 por ciento de las personas encuestadas habló de la vida en los campamentos como “poco pacífica”. De la misma manera, alrededor de la mitad de todos los integrantes de los grupos focales afirmaron que en sus vidas aún no había paz, pese al alto del fuego entre el gobierno y el LRA. Estas opiniones pueden explicarse en parte por las amenazas de seguridad que persisten y la fragilidad percibida de las negociaciones de Juba.

¿Cómo describiría la situación actual en su comunidad?		<p><u>La función de la seguridad y un acuerdo formal de paz:</u></p> <p>Preguntadas sobre las principales barreras para la paz, un 85 por ciento de las personas encuestadas opinó que no podría haber paz sin un acuerdo formal.</p> <p>Preguntados si había o no paz, los grupos focales a menudo respondieron aludiendo a la inseguridad ocasionada por los ladrones de ganado.</p> <p><i>‘Sigo traumatizado por el pasado. Si veo un extraño cuando estoy solo, o si un perro ladra, me asusto. Las negociaciones de paz aún no han acabado. Los Karimojong siguen saqueándonos. Todavía no hay paz.’</i> — hombre del campamento Mucwini</p>
Muy pacífica	1,5%	
Pacífica	53%	
Poco pacífica	44,5%	
Nada pacífica	1%	
Si la compara con antes del acuerdo del Cese de Hostilidades, ¿cómo es hoy?		
Más pacífica	60,5%	
Igual	15,8%	
Menos pacífica	23,7%	
¿Cómo espera que sea la situación en un futuro?		
Muy segura	2,5%	
Segura	69,7%	
Poco segura	27,3%	
Nada segura	0,5%	

Pero la explicación de esta falta de “sensación de paz” entre muchas PDIs estriba, al menos en parte, en la manera en que definen esta palabra. Cuando se les pidió que seleccionaran tantas definiciones de “paz” como creyeran adecuadas, más personas encuestadas eligieron la libertad de movimiento (un 84 por ciento) frente a las que eligieron la ausencia de enfrentamientos (un 70,5 por ciento). La seguridad alimentaria (un 39 por ciento) apareció en tercer lugar.



La falta de seguridad alimentaria, de oportunidades económicas, de educación y de servicios de salud, fueron identificadas como principales preocupaciones de las personas desplazadas, subrayando así el sufrimiento que supone el seguir viviendo en los campamentos.

Otra queja generalizada fue la falta de acceso a la tierra para el cultivo. ‘[Las personas desplazadas] acuden a los nuevos asentamientos incluso si lo único que se les ofrece ahí es agua estancada, porque vivir en los campamentos es como vivir en la cárcel: no tienen tierra,’ afirmó el jefe de un subcondado. Mientras que algunas de las PDI disponen de medios necesarios para arrendar tierras cercanas para cultivar y suplementar así las raciones que reciben del Programa Mundial de Alimentos, la mayoría no puede hacerlo.

La vida en los campamentos se identificó como una de las mayores causas de tensión:

En las palabras de uno de los miembros de la dirección del campamento Acet: ‘La paz es la capacidad de moverte con libertad y hacer lo que quieras. Ahora no hay paz porque estamos presos en un campamento, y nuestras vidas están controladas por otros.’

‘Las cosas no harán sino empeorar, a menos de que las personas puedan volver a sus aldeas y no tengan que seguir dependiendo de la caridad,’ afirmó un joven del campamento Amida.

Otro de los factores que sustentan la preocupación persistente de muchos de los integrantes de los grupos focales fue la opinión generalizada de que brotarían nuevos enfrentamientos, aún más cruentos que los anteriores, si fracasan las negociaciones de Juba. Tanto

es así que casi todos los participantes se mostraron altamente escépticos de que se diera un alto de fuego duradero. La mayoría de las personas migrantes recientes estaban preparadas para volver rápidamente a los campamentos si la situación de seguridad se deteriorara de nuevo. Tan sólo un 5 por ciento aproximadamente de las personas que han dejado los campamentos han vuelto a sus aldeas de origen;⁵ muchas permanecen a pocos kilómetros de los campamentos principales y siguen recibiendo ayuda alimentaria y servicios de salud y educación de los mismos. En este contexto, los informes de que los refugios de los principales campamentos se destruyen tan pronto las personas se desplazan a ubicaciones nuevas son especialmente preocupantes. En otras palabras, el éxodo alentador de los últimos meses no debe verse como una pauta irreversible.

2. El estado de juego: la paz y la seguridad en el norte de Uganda

Los campamentos para personas desplazadas internas han sido una constante de vida en el norte de Uganda desde 1996, fecha en que el Gobierno, una década después del inicio del conflicto con el LRA, obligó a decenas de miles de habitantes del distrito de Gulu a desplazarse a ‘aldeas protegidas’, en un esfuerzo por restarle recursos a los rebeldes. Durante los años desde que se inició el conflicto, entre 1,8 y dos millones de personas se han visto obligadas a acudir a uno de los más de 200 campamentos de este tipo que se establecieron en el norte del país.⁶ Más del 90 por ciento de la población de los tres distritos más afectados por la guerra (Gulu, Kitgum y Pader) se ha visto desplazada, lo que equivale aproximadamente a 1,2 millones de personas.⁷ En la etapa más cruenta del conflicto, las condiciones de vida en estos campamentos eran tales que murieron muchas más personas por causa de enfermedades prevenibles y malnutrición que por ataques del LRA.⁸

El impacto del cese de hostilidades

Desde la firma del acuerdo de Cese de Hostilidades en agosto de 2006, la tendencia hacia un desplazamiento cada vez mayor de la población Acholi, que duraba ya una década, ha comenzado a reducirse. Una marcada disminución de los ataques por parte del LRA y una seguridad mejorada en toda la región han conseguido que muchas de las PDIs vuelvan a sus hogares, o cuanto menos a asentamientos satélite lejos del hacinamiento de los principales campamentos. En mayo de 2007, había en los campamentos de Gulu, Kitgum y Pader unas 723.000 personas, un tercio menos que a finales de 2005.⁹

Una gran mayoría de PDIs afirma que el alto del fuego ha creado una enorme diferencia para sus vidas. Ha aumentado la libertad de movimiento, las personas ya no tienen que dormir a la intemperie por miedo al LRA, hay mayor acceso a la tierra, mayor facilidad para recolectar agua y leña, las clases en las escuelas no se ven constantemente interrumpidas por alertas de seguridad, y el grado de tensión en los campamentos ha disminuido.

Más de la mitad de las PDIs afirman que el CdH ha traído mejoras:

Un cincuenta y siete por ciento de las personas encuestadas afirmó que la seguridad había mejorado. Un 56 por ciento afirmó que tenía mayor libertad de movimiento, y un 34 por ciento afirmó que el alto del fuego había mejorado el acceso a la tierra.

‘La situación está mejorando ahora,’ dijo una mujer del campamento Madi Opei. ‘Podemos ir a cultivar los campos y mandar a los niños a recoger agua a los pozos sin que haya secuestros.’¹⁰

‘Ya no hay tiros,’ afirmó un hombre del campamento Mucwini. ‘Todas las noches, alrededor de las 6 ó las 7, había tiros, y si las UPDF te encontraban fuera de la demarcación del campamento, te apaleaban y te acusaban de ser uno de los rebeldes.’

Según una mujer del campamento Omat: *‘Nuestra relación con el ejército y la policía ha mejorado, puesto que el problema de los colaboradores [personas encontradas fuera de la demarcación del campamento] ha desaparecido.’*

Siguen los riesgos para la población civil

Sin embargo, las PDIs siguen teniendo que hacer frente a una serie de riesgos de seguridad, tanto dentro como fuera de los campamentos. El principal riesgo en los últimos años ha sido el propio LRA, aunque el temor ante los ataques o los secuestros por parte de los rebeldes ha disminuido de forma significativa. No obstante, el LRA fue citado por las PDIs como importante riesgo de seguridad en los tres distritos en que se llevó a cabo la investigación.

No obstante, en los distritos de Kitgum y Pader el temor a los grupos armados de la región colindante de Karamoja, la región con menor tasa de desarrollo de Uganda y con índices de malnutrición mayores que la subregión de Acholi,¹¹ fue mayor aún que el temor al LRA. Grupos pastorales armados de Karamoja entran con frecuencia en las zonas orientales de las subregiones de Acholi y Teso para robar ganado y saquear las aldeas, y a menudo cometen actos criminales como son violaciones y asesinatos durante tales incursiones.

Hay una preocupación constante de que se extienda la inseguridad reinante en Karamoja:

'El gobierno negocia con el LRA, pero debería negociar también con los Karimojong [personas de Karamoja]. Incluso si el proceso de paz con el LRA llega a buen fin, los Karimojong seguirán perjudicándonos. Realizan incursiones tanto desde Sudán como desde la propia Uganda. Y las fuerzas gubernamentales no son capaces de protegernos.' — Alto ejecutivo del campamento Madi Opei

En el distrito de Gulu, la población citó también el miedo a los delitos armados e indiscriminados de los Boocec (que significa 'elementos criminales' en el idioma Acholi), supuestamente desertores de las UPDF, entre otros.

Para muchas personas desplazadas, estos riesgos emergentes ante nuevos grupos armados demuestran la incapacidad del gobierno de mantener la seguridad en la totalidad del extenso territorio del norte de Uganda. Para evitar que la inseguridad reinante en Karamoja haga descarrillar los esfuerzos de paz en Juba, el gobierno de Uganda y la comunidad internacional deben dedicar mayores esfuerzos y recursos financieros al desarrollo y al fortalecimiento del estado de derecho en el nordeste del país. En última instancia, una solución pacífica al conflicto con el LRA no bastará para garantizar una paz duradera. Se necesitan urgentemente medidas no militares para el establecimiento de la paz, el desarrollo y el estado de derecho en Karamoja. Los cimientos para una paz duradera solo podrán sentarse en todo el país a través de los mecanismos necesarios para que todas las comunidades marginadas de Uganda entren en el ruedo político y adquieran confianza en el gobierno.

Las fuerzas de seguridad

La aplicación de la ley en el norte de Uganda ha estado principalmente en manos de las fuerzas militares y las Unidades de Defensa Local (LDU), milicias reclutadas a nivel local que no rinden muchas cuentas al estado.¹² Los 'agentes especiales de policía local', con una pésima formación y muy bajo sueldo, son mucho más numerosos que los efectivos regulares de la policía, y en más de uno de cada tres subcondados no hay presencia policial.¹³ Dada esta ausencia casi total de autoridad estatal, a excepción de los militares y de unos cuantos policías, a menudo ha resultado imposible hacer rendir cuentas a los miembros de las fuerzas de seguridad que han abusado de su poder.

Las actitudes hacia los servicios de seguridad entre las PDIs varían de persona a persona. Muchas agradecen la labor de las UPDF y las LDU en la protección de los campamentos y su respuesta ante los ataques del

LRA y de los Karimojong. Pero incluso aquellas personas que se mostraron agradecidas también expresaron con frecuencia su temor ante las fuerzas de seguridad, puesto que algunos de sus miembros han cometido abusos de derechos humanos, robos y actos de violencia sexual.

De la misma manera, al tiempo que algunas PDIs aplaudieron la labor de la policía en el mantenimiento de la ley y el orden, otras indicaron que el nivel de formación y educación de la policía era muy irregular, y que los efectivos con un menor grado de formación eran los más deshonestos. Algunas de las personas encuestadas afirmaron que una policía con formación inadecuada no supondría mejora alguna con respecto a los militares.

Varias PDIs afirmaron que el sueldo de los integrantes de las LDU y de los efectivos de la policía a menudo llegaba tarde o incluso no llegaba, por lo que estas unidades con frecuencia se cebaban en la población civil. Preguntadas si sería buena la idea de desplegar un mayor efectivo de la policía en el norte de Uganda, tal y como ha prometido hacer el gobierno en su Plan de Paz, Recuperación y Desarrollo (PRDP), la mayoría de las PDIs respondieron afirmativamente, pero con la condición de que la policía recibiera una buena formación y salarios adecuados.

Las PDIs querían mayor seguridad y un estado de derecho, pero no confiaban en los servicios de seguridad:

‘Sería buena idea aumentar el número de efectivos de la policía, pero únicamente si reciben una buena formación. Si sólo reciben formación por unos cuantos meses, no serán mejor que los soldados.’ — hombre del campamento Madi Opei

‘Sería buena idea incrementar el número si se les paga bien y a tiempo. Si no, utilizarán las armas para amenazar a las personas civiles y quitarles el dinero.’ — joven del campamento Amida

Una minoría de integrantes de los grupos focales se mostró opuesta a tener mayor presencia de la policía. *‘Si aumentan en número, simplemente habrá más detenciones arbitrarias,’* dijo un joven del campamento Laguti. *‘No queremos más armas.’*

La Violencia sexual

La violencia sexual se citó en tercer lugar como un gran riesgo de seguridad, después de las incursiones de los Karimojong armados y el LRA. Para las mujeres éste es su mayor temor de seguridad personal, y culpan de ella a los esposos ebrios, a los miembros de los servicios de seguridad, como a las UPDF y las LDU, y a algunos jóvenes.

‘Se esconden entre la maleza, y cuando sales a buscar leña te agarran y te violan,’ dijo una mujer joven del campamento Unyama.

Según el comandante de uno de los campamentos, 'Uno de los mayores problemas en los campamentos es la violencia sexual. En esta semana, una mujer fue violada, y lo mismo sucedió la semana pasada.'

Los hombres jóvenes también citaron la violencia sexual como uno de los mayores riesgos de seguridad, no sólo para sus familias sino también para ellos mismos. Afirmaron que los miembros de las fuerzas de seguridad eran los principales culpables. Para que aumente la confianza en las fuerzas de seguridad, el gobierno debe hacer más por exigir rendición de cuentas a los responsables de la violencia sexual.

La Desintegración social

Muchas PDIs también hablaron de la creciente desintegración de la unidad familiar tradicional de los Acholi. Culpan de ello a una combinación de factores: el alcoholismo, la enfermedad mental de las víctimas del conflicto, y un sinnúmero de tensiones sociales creadas por la vida en los campamentos. En las investigaciones realizadas para este informe fue posible ver algunos de estos problemas de primera mano, ya que las discusiones en los grupos focales a menudo fueron interrumpidas por personas claramente borrachas o con trastornos mentales.

También preocupa la situación de las/los jóvenes. La mitad del total de las PDIs en el norte de Uganda son menores de 15 años.¹⁴ Además, es un choque ver que uno de cada tres niños/mujeres mayores de diez años ha perdido a su padre o a su madre.¹⁵ Dado que muchas personas llevan años viviendo en los campamentos, en algunos casos más de una década, una generación de jóvenes está creciendo sin otra experiencia de vida.

Las discusiones en los grupos focales destacaron incidentes de violencia sexual, disputas domésticas, alcoholismo, enfermedades mentales, enajenación de los jóvenes, inactividad, y frustración contenida, que en opinión de muchas personas surgen de la vida en los campamentos.

Las discusiones en grupos focales muestran una sociedad al borde del colapso:

'Somos un pueblo que está perdiendo el rumbo. Esta es la primera reunión en que nos hemos sentado juntos para intercambiar ideas.' — hombre joven del campamento Amida

'Muchas mujeres tienen que acudir a otros hombres, pues son tan pobres que no ven otra salida. Esto se debe también al hacinamiento y a la desmoralización que causa la vida en el campamento.' — comandante de campamento

3. Opiniones sobre Juba: ¿quién negocia la paz?

Las negociaciones de paz entre el gobierno de Uganda y el LRA se vienen celebrando con interrupciones en Juba, capital del sur de Sudán, desde julio de 2006. Se han alabado ampliamente los esfuerzos de todos los actores principales y el particular los del gobierno de Uganda por sus inconmensurables esfuerzos para mantener las conversaciones sobre la paz en movimiento. Con la mediación del gobierno del sur de Sudán, en la persona de su vicepresidente, Riek Machar, las negociaciones lograron alcanzar un alto del fuego bilateral sin precedentes en agosto de 2006. Tras un estancamiento a principios de 2007 que duró cuatro meses, las negociaciones comenzaron de nuevo en abril, con la ampliación del alto del fuego y un acuerdo sobre Soluciones Duraderas, que aborda temas tales como la necesidad de un gobierno democrático de base amplia en Uganda. En junio de 2007 se llegó a un primer acuerdo sobre los principios de Reconciliación y Rendición de Cuentas. No obstante, las negociaciones han de superar aún varios obstáculos de importancia, entre otros el tema de los cargos formulados por la Corte Penal Internacional contra cuatro comandantes de alto nivel del LRA, entre ellos el líder rebelde, Joseph Kony.

La falta de información menoscaba la confianza de las personas desplazadas internas

En la época en la que se llevó a cabo esta investigación en junio de 2007, la mayoría de las PDI's tenían poco conocimiento sobre lo que estaba sucediendo en las negociaciones de paz. Solo un cuatro por ciento de las/los encuestados sentían que estaban 'bien informados' sobre el proceso de paz. Aunque la gran mayoría de PDI's saben que las negociaciones de paz se están celebrando en Juba, nadie realmente tiene información detallada sobre el contenido de las mismas. La principal fuente de información para las PDI's es la emisora local de radio. Un número muy reducido de personas obtiene información de los periódicos, y muchas afirmaron tener conocimiento de las negociaciones a partir de rumores y de lo que oían de los demás.

'Como el resto de la comunidad, recibo información a través de Mega FM,' dijo el comandante del campamento Mucwini. 'A veces los dirigentes rebeldes llaman a la emisora directamente, y les oímos hablar en la radio, lo que puede tener gran influencia sobre la gente. Por ejemplo, cuando Kony afirmó que la situación de seguridad ya permitía a las personas volver a sus hogares, muchas empezaron a irse.'

Además de saber poco sobre las negociaciones, pocas PDI's tienen información sobre la composición de las delegaciones en Juba. La

mayoría de las/los integrantes de los grupos focales no sabían si tenían o no un representante en las negociaciones de paz. En el campamento Acet, ninguno de los miembros de la directiva del campamento, 20 en total, sabía si estaba representado.

La falta de información y representación menoscaba la confianza de las personas desplazadas:

‘Si tuviera un representante en las negociaciones de paz, esa persona habría vuelto entre rondas para explicarnos lo que había sucedido,’ dijo uno de los directivos del campamento. *‘Y también habría escuchado nuestras opiniones para la próxima ronda.’*

En las palabras de un hombre del campamento Mucwini: *‘Las negociaciones nos serían relevantes si de vez en cuando uno o dos representantes de los Acholi que están en Juba vinieran aquí para discutir los resultados con nosotros, o para escuchar nuestras opiniones. Pero aquí no viene nadie. Todo lo que sabemos es de oídas.’*

En las discusiones con los grupos focales, muchas/muchos de los 91 encuestados expresaron su deseo de que el presidente electo de su subcondado (conocido como ‘LC3’) tuviera mayor información para poder transmitirla a la gente. Pero hasta la fecha, aún no se ha tratado el tema de cómo informar a la población a través de sus representantes locales.

En octubre de 2006, en un esfuerzo por incluir a delegados que representaran mejor a la población afectada, Machar invitó a miembros Acholi del parlamento de Uganda y a líderes de la sociedad civil a unirse a las negociaciones, pero la delegación del LRA se opuso a esta participación.¹⁶ Las continuadas discusiones entre el LRA y las delegaciones gubernamentales sobre una serie de reuniones de consulta sobre el Punto III del Orden del Día, Reconciliación y Rendición de Cuentas, desde entonces llevaron a reuniones organizadas por el gobierno en varios lugares del norte de Uganda. Sin embargo, si estas reuniones no son debidamente planeadas y llevadas a cabo en forma consistente, es muy posible que las discusiones resulten ineficaces y que se llegue a un acuerdo sin escuchar las opiniones reales de las comunidades afectadas.

Sólo una minoría de los integrantes de los grupos focales creían que sus intereses sí se estaban teniendo en cuenta en Juba, y solo unas cuantas personas encuestadas estaban convencidas de que los esfuerzos de paz del gobierno eran realmente sinceros, y de que el que hubiera guerra o paz dependía exclusivamente de lo que hiciera el LRA.

Una opinión generalizada fue que el gobierno no estaba comprometido realmente con las negociaciones:

‘Cuando parece que las cosas van bien, el gobierno hace algo que vuelve a distanciar a las partes.’ — hombre del campamento Lugore

'Si realmente estuvieran comprometidos,' dijo un comandante del campamento, '¿por qué no negocian también con los Karimojong? ¿Por qué los Karimojong hoy nos atacan de la misma manera que lo hacían los rebeldes antes, pero el gobierno no negocia con ellos?'

Otra opinión, expresada por una minoría de participantes, fue que el gobierno no quiere la paz porque hace negocio con la guerra.

Una minoría de las personas encuestadas cree que el conflicto sigue porque los oficiales gubernamentales están haciendo negocio:

'No puede haber paz porque los dirigentes de este país han convertido la guerra en un negocio, y por ello quieren que continúe,' dijo una mujer joven del campamento de Unyama.

Algunos oficiales compartieron esa opinión. *'La guerra se ha convertido en un negocio,'* dijo un funcionario de la oficina del subcondado de Paicho. *'Si tienes un puesto importante, no quieres que acabe la guerra.'*

Pese a los importantes pasos conseguidos en las negociaciones de Juba, en relación con la planeación de más amplias consultas, llega muy poca información a la población desplazada, reforzando así el arraigado sentimiento de marginación que existe entre gran parte de esta población. Las/los participantes en la encuesta manifestaron tener poca confianza en el gobierno, al que culpan por no protegerles adecuadamente de la violencia, por obligarles a acudir a los campamentos, y por no cubrir sus necesidades más básicas durante este desplazamiento.¹⁷ Esta enajenación del proceso de Juba y la falta de confianza en el gobierno podría en última instancia, minar las perspectivas de una paz sostenible, si las medidas que se están llevando a cabo para solucionar los asuntos vigentes no son escaladas.

La justicia y el papel de la Corte Penal Internacional

La formulación de cargos por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) contra comandantes de alto rango del LRA ha suscitado controversia y debate, tanto en el norte de Uganda como a nivel internacional. La insistencia del LRA en que se retiren los cargos ha llevado a muchos observadores a concluir que será necesario alcanzar un compromiso que garantice la seguridad y los medios de vida de los líderes rebeldes si el conflicto ha de resolverse.

Se han formulado diversas sugerencias con respecto al tipo de compromiso a alcanzar, entre otras una amnistía, o asilo en un país tercero para los líderes del LRA; una comisión para la verdad y la

reconciliación; la justicia tradicional Acholi (conocida como *mato oput*, precisa que los autores se responsabilicen de sus crímenes y paguen una compensación, en lugar de ir a la cárcel); o una combinación de todas ellas que garantice que cualquier castigo al que hayan de hacer frente Joseph Kony y sus lugartenientes no sea tan duro como para animarles a que salgan del monte, pero que cumpla los estándares internacionales de rendición de cuentas y justicia. Un importante acuerdo sobre reconciliación y rendición de cuentas alcanzado por ambas partes en junio de 2007 recoge una combinación de mecanismos de justicia tradicionales y legales. Si no se definen mecanismos adecuados para su ejecución, es poco probable que este acuerdo satisfaga los requisitos internacionales sobre justicia y rendición de cuentas.

Las opiniones de las PDIs sobre el tema de justicia son de una importancia fundamental. Estas personas serán las que habrán de perdonar las atrocidades cometidas, y en algunos casos ser vecinos de los autores de las mismas. En las discusiones con los grupos focales, la inmensa mayoría de PDIs se mostraron contrarias a los cargos formulados por la CPI.

Un 37 por ciento de los encuestados opinó que la CPI era el principal obstáculo para el proceso de paz, y casi todos los integrantes de los grupos focales pensaban que la CPI había ‘hecho daño’ en lugar de ‘ayudar’:

‘Estos cargos deben retirarse. Hubo un momento en que los rebeldes estaban dispuestos a volver a las aldeas. Pero los cargos de la CPI han hecho que se queden en el monte.’ — hombre del campamento Mucwini

‘Si no se retiran las órdenes de detención, Kony no se entregará y el próximo capítulo de este conflicto será peor que el anterior.’ — hombre del campamento Lugore

Muchas PDIs habían escuchado a los líderes del LRA, entre ellos a Kony y su mano derecha, Vincent Otti, afirmar en la radio local que estos cargos eran el principal obstáculo para la paz. Además, muchas PDIs asocian también a la CPI con la ejecución de Saddam Hussein en Iraq. El nombre del dictador iraquí surgió de motu propio al menos una vez en cada una de las discusiones habidas con los grupos focales.

Muchas PDIs asocian a la CPI con la ejecución de Saddam Hussein en Iraq:

‘Si la CPI detiene a Kony, lo ejecutarán como a Saddam,’ dijo un joven del campamento Amida. ‘Pero si acaba en la cárcel en Uganda, pasado un tiempo las personas podrán perdonar.’

Lo que sí parece claro es que la amplia oposición que existe hacia la actuación de la CPI sirve para desviar la atención de las víctimas de la responsabilidad que el propio gobierno de Uganda tiene de aportar una serie exhaustiva de mecanismos de justicia transitorios. Y así se corre un verdadero riesgo de que, si el proceso de paz encuentra mayores

problemas relacionados con el asunto de la justicia, la CPI se convierta en el chivo expiatorio.

También sirve para enturbiar ciertos matices en las actitudes de las personas desplazadas. Si se retira a la CPI de la discusión, el apoyo al procesamiento de los comandantes de mayor rango del LRA aumenta significativamente. En algunos casos, las PDIs concretaron que les gustaría ver a los líderes del LRA procesados por los tribunales de Uganda; en otros, simplemente se mostraron a favor del 'procesamiento', sin una idea muy clara de quién se encargaría de llevarlo a cabo.

Algunos integrantes de los grupos focales cuyos familiares habían sufrido a manos del LRA parecían suprimir el deseo de ver a los máximos responsables del LRA castigados, bien en aras al consenso, bien por presión de sus vecinos. Una mujer, cuyos dos hijos fueron asesinados por el LRA, se negó en un principio a alzar la mano con las demás mujeres que se mostraban a favor de la amnistía como mejor opción, pero al ver que las demás participantes reparaban en ello, levantó también la mano. De hecho, muchas de las personas que opinan que los comandantes del LRA merecen ser castigados afirman que apoyarían la justicia tradicional o la amnistía si con ello se consiguiera la paz.

El ansia colectiva de paz fue lo más importante para la mayoría:

'La justicia sin paz no nos sirve de nada.' — jefe de parroquia

'Sí, es muy doloroso, pero por el bien de la paz debemos perdonar.' — mujer del campamento Omat cuyos hijos fueron asesinados por el LRA

'Casi todos los integrantes de esta comunidad se han visto involucrados con el LRA de una manera u otra. Muchos han cometido crímenes. Si hay procesamientos, todos han de ser procesados. Si hay perdón, debe ser para todos.' — miembro de la directiva del campamento Acet

Como resumen, puede decirse que las opiniones de las PDIs sobre el tema de la justicia son bien complejas. Muchas afirman estar a favor de los procesamientos, sobre todo si se realizan por los tribunales de Uganda, pero este apoyo a menudo se ve templado por la acuciante prioridad que se otorga a la paz. Al mismo tiempo también hay indicios de que las comunidades encontrarían difícil de asimilar una amnistía permanente para los responsables de los crímenes más atroces.

El gobierno de Uganda debe por lo tanto, con la ayuda y el apoyo de aliados internacionales y en estrecha consulta con las comunidades afectadas, aunar esfuerzos para desarrollar unos mecanismos de justicia que satisfagan tanto las aspiraciones de estas comunidades como las normas internacionales de justicia y rendición de cuentas.

Reinserción de excombatientes

Si el proceso de paz de Juba logra conseguir un acuerdo exhaustivo, una de las principales dificultades será la reinserción en la vida comunitaria de los combatientes del LRA, aspecto previsto en el Punto V del Orden del Día (Desmovilización, Desarme y Reinserción) de las negociaciones de paz. Muchos excombatientes han vivido durante años en el monte, presenciado incidentes traumáticos y, en algunos casos, cometido atrocidades. Hay indicios evidentes de cierta aprehensión entre la población civil de Acholi de convivir con excombatientes del LRA, y el miedo al *cen*, un espíritu maligno que se cree emana de las malas obras pasadas, se cita como importante barrera para la integración de excombatientes.¹⁸

No obstante, y pese a esta preocupación, la mayoría de las/los integrantes de los grupos focales expresaron la opinión de que la reinserción sería posible siempre y cuando los excombatientes recibieran consejería antes de retornar, así como ayuda económica y profesional una vez reinsertados.

Parte de este optimismo se debe al hecho de que muchos excombatientes del LRA ya han sido integrados en los campamentos. Bajo la Ley de Amnistía del gobierno, los que se entregan reciben un paquete de reinserción equivalente a unos 250 dólares, además de educación o formación profesional. Pero no existe un sistema formal de consejería, y a pesar de que muchos excombatientes sí reciben este servicio de las ONG, otros se quedan sin ella.

La mayoría de los encuestados expresaron la opinión de que la reinserción es posible siempre y cuando los excombatientes reciban consejería:

La historia de un niño retornado: *'Son muchos los que han retornado ya. A veces matan. A veces no conocen otra cosa que la vida en el monte. Una vez un niño que había regresado del monte con su madre, cuando pasó un vehículo por la carretera, gritaba a su padre, "¡Dispárale, dispárale!" El gobierno debe habilitar centros en los que estas personas reciban cuidados durante algún tiempo.'* — comandante de un campamento

La importancia de la consejería fue reiterada una y otra vez por los integrantes de los grupos focales. Aquellos que han convivido con excombatientes del LRA conocen el profundo trauma psicológico que la vida en el monte puede causar. Algunos integrantes de los grupos focales insistieron en que sólo aquellos que tengan familiares con los que puedan vivir debían retornar a las comunidades, mientras que los demás debían permanecer aislados en centros especiales de rehabilitación. Otros insistieron en que la comunidad debería ser parte en la decisión sobre cuáles eran las personas que estaban en condiciones de volver, y que la propia comunidad debía recibir consejería sobre la convivencia con excombatientes. Un participante del campamento de

Lugore también indicó que podrían surgir envidias entre la población si los excombatientes del LRA recibían generosas ayudas para la reinserción, mientras que el resto de la población civil no recibía nada.

La ayuda hacia la reinserción debe involucrar a las comunidades:

'Si ellos [ex-LRA] han de verse empoderados, también la comunidad debe serlo.' — hombre del campamento Lugore

Resulta evidente que la reinserción exitosa de los excombatientes precisará recursos de consideración para cubrir las ayudas de reinserción y los servicios de consejería tanto para excombatientes como para las comunidades que han de acogerlos. Será importante que el PRDP, como marco futuro que definirá las actuaciones en el norte, tenga bien en cuenta este aspecto.

4. Entre la esperanza y el temor: el reto de volver a casa

A juzgar por las discusiones habidas en los grupos focales, la inmensa mayoría de PDIs que permanecen en los campamentos en la subregión de Acholi han pensado seriamente en trasladarse pronto a asentamientos satélite o a sus propias aldeas, movidas por el deseo de cultivar sus propias tierras, producir sus propios alimentos, y retomar su forma de vida tradicional. Muchas afirman que están esperando la firma de un acuerdo de paz formal. Otras retrasan su regreso hasta octubre o noviembre, época en que la hierba será lo suficientemente alta como para proporcionar techados. Lo que parece evidente es que, si se firma un acuerdo de paz y la situación de seguridad permanece estable, la mayoría de las PDIs dejará los campamentos en cuestión de meses.

Las necesidades humanitarias y la ausencia de un dividendo de paz

Los temores de seguridad relativos al LRA y a los saqueadores Karimojong, así como la presencia de minas en muchas zonas, son los factores que con mayor frecuencia se citan como razón para no dejar los campamentos. No obstante, incluso si se vencieran estos temores, muchas PDIs seguirían teniendo miedo a abandonarlos.

Más de la mitad de las personas encuestadas afirmaron que la mejora en la seguridad aún no ha producido un dividendo de paz:

Tan sólo un 9 por ciento de las personas encuestadas había notado una mejora en la seguridad alimentaria, y sólo un 17 por ciento una mejora en la prestación de servicios de salud y educación. Más de la mitad (un 53 por ciento) afirmó que no habían aumentado las actividades de desarrollo desde que comenzó el alto del fuego.



Los nuevos asentamientos a menudo carecen de protección de las fuerzas de seguridad. Muchos no tienen agua potable, y la mayoría no tiene escuelas o clínicas de salud en funcionamiento. Muchos no tienen acceso por carretera. Las PDI necesitan además gran cantidad de insumos para su reubicación, entre otros semillas y herramientas de cultivo, así como hierbas crecidas o lonas para construir un refugio. A pesar de que el gobierno ha prometido ayudas para la reubicación, muchas PDI dicen que tales ayudas no se han materializado.

La mejora del acceso por carretera a las aldeas más aisladas, y en muchos casos la construcción de carreteras nuevas, es importante por varias razones. En primer lugar, si no hay acceso por carretera, las personas reubicadas en asentamientos nuevos no podrán recibir las ayudas del Programa Mundial de Alimentos, ya que su distribución suele realizarse en los campamentos de mayor envergadura. En segundo lugar, la prestación de servicios en zonas a las que no llegan las carreteras resultará en extremo difícil, por lo que muchas personas carecerán de acceso a servicios básicos de salud y educación. Y como tercer motivo, los habitantes de aldeas sin acceso viario tendrán mayores dificultades a la hora de acceder a los mercados para vender su excedente de producción.

El Plan de Paz, Recuperación y Desarrollo del gobierno asigna tan sólo 29 millones de dólares en tres años a carreteras en el norte de Uganda, cantidad que abarca también el mantenimiento periódico.¹⁹ Tras años de abandono, especialmente de carreteras comunitarias, esta cantidad no será suficiente para garantizar a las PDI una transición con éxito de la vida en los campamentos.

También se precisará apoyo adicional para los sectores más vulnerables de la población, como son niñas y niños huérfanos, viudas, personas mayores y personas discapacitadas. Un 9 por ciento de los niños son huérfanos, y un 12 por ciento de las mujeres son viudas.²⁰ Además, los campamentos tienen un elevado número de personas discapacitadas o con enfermedades mentales, por lo que un sector amplio de PDI no podrá realizar la transición de la vida en los campamentos sin ayuda considerable y dirigida especialmente hacia ellas.

Una elevada proporción de la población desplazada (personas viudas, huérfanas, discapacitadas o mayores) no podrá superar la transición sin ayuda específica:

‘Las personas discapacitadas no tienen manera de volver a casa, o de sobrevivir una vez ahí,’ afirmó David Ngole, jefe del subcondado de Palaro. ‘Debemos pensar más en las personas vulnerables.’

‘Las personas mayores no tienen fuerzas para cultivar el campo, y por tanto no tienen para comer.’ — hombre del campamento Mucwini

Libertad de movimiento y el papel del gobierno en fomentar la reubicación

El gobierno de Uganda ha formulado políticas ejemplares para la protección de las PDIs a lo largo del proceso de desplazamiento y retorno.²¹ Sin embargo, la puesta en práctica de estas políticas algunas veces ha dejado mucho que desear.

Mientras que por lo general se ha concedido libertad de movimiento, siguen habiendo muchas zonas en las que los desplazamientos se limitan a ubicaciones identificadas por el Comité de Seguridad del Distrito y el Comité de Gestión de Desastres del Distrito. Al mismo tiempo, y en aparente contradicción a los riesgos de seguridad y a las restricciones de movimiento que persisten, los funcionarios del gobierno han alentado en repetidas ocasiones al desplazamiento en términos que parecían indicar que dicho desplazamiento resultaba obligatorio. A finales de 2006, el Ministro de Preparación ante Desastres y Emergencias declaró que las PDIs debían abandonar los campamentos antes del 31 de diciembre.²² En abril de 2007, ese mismo ministro envió una carta a los jefes administrativos de distrito para animarles a ‘poner en la lista negra’ a aquellas ONG que siguieran aportando servicios en los campamentos cuyo cierre se había previsto.²³

En algunos casos, se afirma incluso que los funcionarios encargados, por la oficina del Primer Ministro en noviembre de 2006, de evaluar las intenciones de retorno de las personas desplazadas, instaban expresamente a estas personas a que abandonaran los campamentos.²⁴

Algunas PDIs se quejaron de que se les había pedido que abandonaran los campamentos antes de estar preparadas para ello:

‘El presidente de nuestro distrito está anunciando por radio que todos deben volver a sus aldeas,’ dijo un miembro de la directiva del campamento Acet. ‘Primero se nos obligó a trasladarnos a los campamentos, ahora se nos obliga de nuevo.’

En las zonas en que aún no se ha concedido libertad de movimiento, las ubicaciones declaradas como seguras parecen ser aquellas en que se ha desplegado un destacamento de las UPDF o las LDU. Según el

comandante del campamento Madi Opei: 'Las personas se trasladan a lugares donde hay destacamentos militares. No se les permitiría trasladarse a otras ubicaciones.' En algunos casos se aduce que se han desplegado destacamentos de las UPDF a petición de las personas desplazadas. En otras zonas, hay una ausencia total de seguridad y no se aplica la ley.

La mayoría de PDI's carecen de la información de seguridad que necesitan para decidir si deben reubicar a sus familias, y dónde. Las autoridades locales deben emplear mayores esfuerzos en proporcionar esta información para que la migración que se avecina esté fundamentada en decisiones sólidas tomadas en base a información veraz por parte de las propias personas desplazadas. A este fin, el gobierno debe anular las restricciones sobre movimiento que aún existen y asegurarse de que no se pone ninguna presión sobre las PDI's para que se trasladen antes de estén listas.

La cuestión de la tierra

Un tema que surgió una y otra vez en las discusiones con los grupos focales y en las entrevistas con líderes de los campamentos y representantes del gobierno local fueron los posibles conflictos sobre tenencia de la tierra. Más del 90 por ciento de la población de Acholi se ha visto desplazada de sus tierras durante la mayor parte de la década pasada, y, dado que la titularidad de la tierra se basa principalmente en la tenencia tradicional (es decir, reglamento informal desarrollado a lo largo de generaciones), existe una preocupación generalizada de que los conflictos suscitados por derechos de la tierra pudieran anular los progresos conseguidos en la mesa de negociaciones. 'Las disputas sobre la tierra es uno de los principales problemas que tenemos,' afirmó el jefe de una parroquia.

Para muchas personas desplazadas la tierra es el único capital que poseen. Con anterioridad al conflicto, la mayoría de la población Acholi vivía en aldeas y tenía ganado, pero en el tiempo que ha durado el conflicto el ganado prácticamente desapareció. Dadas las escasas oportunidades para la generación de ingresos en los campamentos, las PDI's retornarán a sus hogares casi sin ninguna posesión. Debido a ello las tierras son un bien sumamente preciado que defenderán a toda costa.

Existe la preocupación generalizada de que los conflictos por las tierras anularán los progresos conseguidos en la mesa de negociaciones:

Según afirmó un hombre en el campamento de Lugore: '*Ahora que las personas se disponen a volver a sus casas, la cuestión de la tierra es una disputa en ciernes que podría provocar un conflicto aún mayor.*'

'Las disputas sobre las tierras están suscitando grandes tensiones entre la comunidad,' afirmó un miembro de la directiva del campamento Acet. '*Algunas*

personas están intimidando a otras para que no vuelvan a sus hogares porque quieren quedarse con sus tierras.'

Como ya indicó en 2005 un informe de las Organizaciones de la Sociedad Civil por la Paz en el Norte de Uganda, las personas que ostentan titularidad de la tierra por tenencia tradicional, sin más documentación legal – algo que sucede con la mayoría de la población desplazada – corren el riesgo de perder sus tierras, por diversas razones. Entre ellas se encuentran el desarrollo dirigido por el gobierno, los arrendamientos concedidos a inversionistas, las tierras arrebatadas por familiares o vecinos, o mediante fraude, *ocupas*, minas y conflictos entre sistemas tradicionales y legales.²⁵ Los planes del gobierno de promover el desarrollo mediante la agricultura mecanizada²⁶ y la creación de un mercado de tierras podrían exacerbar el miedo a perder la tierra, y minar aún más la confianza de la población en el gobierno.

De hecho, muchos de estos riesgos fueron mencionados por los integrantes de los grupos focales. En el campamento de Unyama, dos de los participantes afirmaron no poder volver a sus hogares porque el gobierno les había expropiado las tierras para la construcción de una universidad y la ampliación de un instituto nacional de formación de profesores. En Lugore, el jefe del subcondado afirmó que había acudido ese día al campamento para mediar en una disputa en que un funcionario local había sido sobornado para conceder tierras a una persona a las que por derecho no pertenecían. Un informe reciente del *Refugee Law Project* (Ayuda para Refugiados) reportó dos casos de asesinatos de mujeres solteras para que no reclamaran las tierras.²⁷

Según la tradición, los jefes tribales de los Acholi eran los máximos árbitros en las disputas, y mantenían un registro de la distribución de las tierras entre las familias de sus respectivas comunidades. Pero con el enorme número de muertes y desplazamientos acontecidos en los últimos años, muchos de estos conocimientos se han perdido. También existen numerosos incentivos y oportunidades para que las personas que ostentan el poder sobre el tema de la tierra cometan abusos de poder. Según el comandante del campamento de Unyama, algunos jefes tribales han sido blanco de extorsiones y violencia precisamente por tener tales conocimientos.

La falta de documentación formal que demuestre titularidad de la tierra es un problema sobre todo para las personas más vulnerables: huérfanos que no saben dónde está la parcela que perteneció a su familia, o personas marginadas que no son capaces de defender aquello que saben es suyo. 'Muchas personas han perdido a sus padres,' dijo un joven del campamento Laguti. 'Dado que sólo los jefes saben qué tierra pertenece a quién, podrían aprovecharse de los huérfanos, dándoles una parte más pequeña de la tierra.'

La cuestión de la tierra corre el riesgo de avivar el rencor entre los distintos clanes, además de alimentar un sentimiento cada vez mayor de rechazo hacia el gobierno. Si ha de evitarse una nueva ola de inestabilidad en el norte de Uganda, es fundamental que se dedique mucha mayor atención a este tema. Esta atención podría materializarse de distintas formas, pero lo fundamental es que las actuaciones que se lleven a cabo sean sensibles a la situación concreta que se vive en el norte de Uganda. Como mínimo, las políticas deben reconocer la necesidad y el deseo de las PDI de volver a su tierra, así como las tensiones que pueden suscitarse al intentar otorgar títulos sobre tierras que se vienen manteniendo bajo un sistema de tenencia tradicional, en una sociedad en que los derechos de la tierra son derechos colectivos y los índices de alfabetización extremadamente bajos. En la medida de lo posible, la demarcación y el registro de la tierra debe realizarse en el marco del sistema tradicional de tenencia, y debe tener en cuenta sobre todo las vulnerabilidades concretas de mujeres y niños.

5. Conclusión

Las actuales negociaciones en Juba representan la mejor esperanza de paz para la población del norte de Uganda. No obstante, no debe caber duda de que la situación sigue siendo en extremo precaria. Las consecuencias de la guerra y de la permanencia forzosa de la población en campamentos han llevado a la población civil del norte de Uganda al borde del colapso. Si las negociaciones de Juba fracasan, se podría producir una nueva ola de violencia que no sólo serviría para anular los avances conseguidos recientemente, sino que provocaría también el colapso total, tanto social como económico, de la sociedad.

A pesar de que las negociaciones de Juba han comenzado a atraer la atención y la participación que merecen de la comunidad internacional, hasta el momento no se están teniendo en cuenta debidamente las opiniones de las personas más afectadas por el proceso de paz. Existe ahora una oportunidad para dejar de lado las divisiones del pasado entre el norte y el sur y trabajar juntos por la paz. Sin embargo, si no se aborda el sentimiento de marginación y desconfianza que embarga a muchas personas desplazadas, estas divisiones persistirán. Si se tienen en cuenta ahora las preocupaciones de las personas directamente afectadas y se prevén las muchas dificultades que se suscitarán durante la transición post conflicto, se podrá contar con los pasos hacia una paz duradera.

Notas

¹ Centro para el Estudio de las Economías Africanas, Departamento de Economía, Universidad de Oxford, Collier Paul (2004), *Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development*, disponible en <http://www.un.org/esa/documents/Development.and.Conflict2.pdf>, (consultado por el autor por última vez el 31 de julio de 2007) p.9.

² Este informe está fundamentado en las conclusiones de una encuesta cuantitativa de 600 PDIs en 11 campamentos de los distritos de Gulu, Kitgum y Pader, así como en una serie de discusiones de grupos focales integrados por 91 PDIs, y entrevistas con líderes de campamentos y representantes del gobierno local de 8 campamentos de estos mismos distritos. Las opiniones recogidas de las discusiones en los grupos focales y las entrevistas, que se citan extensamente, sirven de complemento a la encuesta y añaden una perspectiva más a las actitudes de las personas desplazadas. Las investigaciones se llevaron a cabo entre mayo y junio de 2007.

Deben puntualizarse varias limitaciones importantes de este informe. En primer lugar, a pesar de que aporta una serie de recomendaciones de política concretas, su finalidad principal es dar voz a la población desplazada. En segundo lugar, las investigaciones se llevaron a cabo únicamente en la región de Acholi. Pese a que algunas de las conclusiones a que se llegan en el informe serán sin duda de aplicación también a las regiones de Teso y Lango, puede que otras no lo sean. En tercer lugar, el lector debe emplear cautela a la hora de extrapolar los datos aquí presentados a la totalidad de la población Acholi. Pese a la muestra relativamente extensa de encuestados (600), no se emplearon métodos rigurosos de muestra por las dificultades logísticas que ello presentaría en el norte de Uganda. Dada la uniformidad de la información surgida de la encuesta, de las discusiones con los grupos focales y de las entrevistas, confiamos, no obstante, en la validez del análisis y de las conclusiones generales del informe.

³ Organizaciones de la Sociedad Civil por la Paz en el Norte de Uganda (2004), *Nowhere to Hide. Humanitarian Protection Threats in Northern Uganda*, p.10.

⁴ Annan, Blattman y Horton (2006), disponible en www.sway-uganda.org (consultado por el autor por última vez el 31 de julio de 2007)

⁵ Grupo de Trabajo para Uganda del Comité Permanente Interagencias.

⁶ 'Contando el costo: Veinte Años de Guerra en el Norte de Uganda', Organizaciones de la Sociedad Civil por la Paz en el Norte de Uganda, 30 de marzo de 2006.

⁷ Ibid.

⁸ Ver, por ejemplo, 'Encuesta de Salud e Índice de Mortalidad entre las Personas Desplazadas Internas en los Distritos de Gulu, Kitgum y Pader, Norte de Uganda', Ministerio de Salud de Uganda, 1 de julio de 2005. www.who.int/hac/crisis/uga/sitreps/Ugandamortsurvey.pdf.

⁹ Grupo de Trabajo para Uganda del Comité Permanente Interagencias, IDP Population Movement, May 2007.

¹⁰ Los integrantes de los grupos focales estaban divididos en cuatro categorías: mujeres de entre 30 y 60 años de edad; mujeres de entre 15 y 29 años; hombres de entre 30 y 60 años de edad; y hombres de entre 15 y 29 años. Para efectos de este informe, cuando los integrantes se identifican como 'hombre' o 'mujer', tienen entre 30 y 60 años; cuando se identifican como 'mujer joven' u 'hombre joven' tienen entre 15 y 29 años de edad. Uno de los grupos focales, en Acet, estaba integrado por un grupo mixto de mujeres y hombres de edades comprendidas entre los 30 y los 60 años, que juntos conformaban el grupo directivo del campamento.

¹¹ ONU OCHA (2007), Revisión a mitad de año del Proceso de Llamamientos Consolidados (CAP).

¹² Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2007), *informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Seguimiento de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Addendum: Informe sobre el Trabajo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Uganda*, p.9.

¹³ República de Uganda (Kampala: agosto de 2006) *National Peace Recovery and Development Plan for Northern Uganda*, p.36; y República de Uganda (Kampala: marzo de 2007) *National Peace Recovery and Development Plan for Northern Uganda*, p.42.

¹⁴ 'Contando el costo', op. cit.

¹⁵ Estudio del Perfil de las Personas Desplazadas Internas del Norte de Uganda, Oficina del Primer Ministro, Departamento de Preparación ante Desastres y Refugiados, Volumen II, septiembre de 2006.

¹⁶ 'Northern Uganda: Seizing the Opportunity for Peace', International Crisis Group, Africa Report No. 124, 26 de abril de 2007, p.14.

¹⁷ Organizaciones de la Sociedad Civil por la Paz en el Norte de Uganda (2004), *Nowhere to Hide*, op. cit.

¹⁸ Baines, E.K. (2007) 'The Haunting of Alice: Local Approaches to Justice and Reconciliation in Northern Uganda', *The International Journal of Transitional Justice*, Vol. 1, 2007, 91–114.

¹⁹ 'National Peace, Recovery and Development Plan for Northern Uganda: Second Draft for Consultations', Gobierno de Uganda, 9 de marzo de 2007.

²⁰ 'Estudio del Perfil de las Personas Desplazadas Internas del Norte de Uganda', op. cit.

²¹ Ver, por ejemplo, República de Uganda (Oficina del Primer Ministro: agosto de 2004), *The National Policy for Internally Displaced Persons*.

²² *New Vision* (octubre de 2006) cita al Ministro de Preparación ante Desastres y Emergencias, Tarsis Kabwegyere,: 'Hemos contratado también a 29 encargados de reasentamiento para garantizar que para el 31 de diciembre todos los campamentos estén vacíos.' [traducción no oficial de la cita en inglés]

²³ Kawegyere, T. (5 de abril de 2007), correspondencia oficial a los presidentes de distrito del norte de Uganda 'Re: Establishing Humanitarian Facilities in the Old Camps'.

²⁴ Refugee Law Project (Universidad de Makere: junio de 2007), *Briefing Paper: Rapid Assessment of Population Movement in Gulu and Pader*, p.7. Ver también *New Vision* (octubre de 2006), op. cit.

²⁵ 'Land Matters in Displacement: The Importance of Land Rights in Acholi Region and What Threatens Them', Organizaciones de la Sociedad Civil por la Paz en el Norte de Uganda, diciembre de 2004, p.xiii.

²⁶ Ver Ministerio de la Tierra, la Vivienda y el Desarrollo Urbano (2006), *Position Paper on Service Delivery on National Peace, Recovery and Development Plan for Northern Uganda (PRDP) 2006–2009*.

²⁷ Refugee Law Project (Universidad de Makere: junio de 2007), *Briefing Paper: Rapid Assessment of Population Movement in Gulu and Pader*, p.7.

© Oxfam Internacional, septiembre de 2007

Este documento fue elaborado por Dan Vexler, con la colaboración de lo Schmid. Forma parte de la serie de documentos escritos para contribuir al debate público sobre temas de política humanitaria y desarrollo.

El texto puede ser utilizado libremente en campañas, así como en el ámbito educativo y de la investigación, siempre que se indique la fuente de forma completa. El titular del copyright requiere que todo uso de su obra le sea comunicado con el objeto de evaluar su impacto. Para la reproducción del texto en otras circunstancias, o para uso en otras publicaciones, o en traducciones o adaptaciones, debe solicitarse permiso y puede requerir el pago de una tasa. Correo electrónico: publish@oxfam.org.uk.

Para más información sobre las cuestiones abordadas en este documento, por favor escriba a advocacy@oxfaminternational.org.

La información contenida en este informe es correcta en el momento de su publicación.

Oxfam Internacional es una confederación de trece organizaciones que trabajan conjuntamente en más de 100 países para encontrar soluciones duraderas a la pobreza y la injusticia: Oxfam América, Oxfam-Bélgica, Oxfam Canadá, Oxfam Australia, Oxfam Alemania, Oxfam Francia – Agir Ici, Oxfam GB, Oxfam Hong Kong, Intermón Oxfam (España), Oxfam Irlanda, Oxfam Novib, Oxfam Nueva Zelanda y Oxfam Quebec. Si desea más información por favor llame o escriba a cualquiera de las agencias o visite www.oxfam.org.

<p>Oxfam América 226 Causeway Street, 5th Floor Boston, MA 02114-2206, USA +1 800-77-OXFAM +1 617-482-1211 E-mail: info@oxfamamerica.org www.oxfamamerica.org</p>	<p>Oxfam Hong Kong 17/fl., China United Centre, 28 Marble Road, North Point, Hong Kong Tel: +852.2520.2525 E-mail: info@oxfam.org.hk www.oxfam.org.hk</p>
<p>Oxfam Australia 156 George St., Fitzroy, Victoria 3065, Australia Tel: +61.3.9289.9444 E-mail: enquire@oxfam.org.au www.oxfam.org.au</p>	<p>Intermón Oxfam (España) Roger de Llúria 15, 08010, Barcelona, Spain Tel: +34.902.330.331 E-mail: info@intermonoxfam.org www.intermonoxfam.org</p>
<p>Oxfam Bélgica Rue des Quatre Vents 60, 1080 Brussels, Belgium Tel: +32.2.501.6700 E-mail: oxfamsol@oxfamsol.be www.oxfamsol.be</p>	<p>Oxfam Irlanda Dublin Office, 9 Burgh Quay, Dublin 2, Ireland Tel: +353.1.672.7662 Belfast Office, 115 North St, Belfast BT1 1ND, UK Tel: +44.28.9023.0220 E-mail: communications@oxfamireland.org www.oxfamireland.org</p>
<p>Oxfam Canadá 250 City Centre Ave, Suite 400, Ottawa, Ontario, K1R 6K7, Canada Tel: +1.613.237.5236 E-mail: info@oxfam.ca www.oxfam.ca</p>	<p>Oxfam Nueva Zelanda PO Box 68357, Auckland 1145, New Zealand Tel: +64.9.355.6500 (Toll-free 0800 400 666) E-mail: oxfam@oxfam.org.nz www.oxfam.org.nz</p>
<p>Oxfam Francia - Agir ici 104 rue Oberkampf, 75011 Paris, France Tel: + 33 1 56 98 24 40. E-mail: info@oxfamfrance.org www.oxfamfrance.org</p>	<p>Oxfam Novib (Países Bajos) Mauritskade 9, Postbus 30919, 2500 GX, The Hague, The Netherlands Tel: +31.70.342.1621 E-mail: info@oxfamnovib.nl www.oxfamnovib.nl</p>
<p>Oxfam Alemania Greifswalder Str. 33a, 10405 Berlin, Germany Tel: +49.30.428.50621 E-mail: info@oxfam.de www.oxfam.de</p>	<p>Oxfam Québec 2330 rue Notre Dame Ouest, bureau 200, Montréal, Quebec, H3J 2Y2, Canada Tel: +1.514.937.1614 E-mail: info@oxfam.qc.ca www.oxfam.qc.ca</p>
<p>Oxfam GB Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK Tel: +44 (0)1865.473727 E-mail: enquiries@oxfam.org.uk www.oxfam.org.uk</p>	

Secretariado de Oxfam Internacional: Suite 20, 266 Banbury Road, Oxford, OX2 7DL, UK

Tel: +44.(0)1865.339100. E-mail: information@oxfaminternational.org. Web: www.oxfam.org

Oficinas de Incidencia Política de Oxfam Internacional: E-mail: advocacy@oxfaminternational.org

Washington: 1100 15th St., NW, Ste. 600, Washington, DC 20005-1759, EE.UU. Tel: +1.202.496.1170.

Bruselas: 22 rue de Commerce, 1000 Bruselas, Bélgica, Tel: +322.502.0391.

Ginebra: 15 rue des Savoises, 1205 Ginebra, Suiza, Tel: +41.22.321.2371.

Nueva York: 355 Lexington Avenue, 3rd Floor, Nueva York, NY 10017, EE.UU., Tel: +1.212.687.2091.

Organizaciones vinculadas. Las siguientes organizaciones están vinculadas a Oxfam Internacional:

Oxfam Japón Maruko bldg. 2F, 1-20-6, Higashi-Ueno, Taito-ku, Tokio 110-0015, Japón

Tel: + 81.3.3834.1556. E-mail: info@oxfam.jp Web: www.oxfam.jp

Oxfam India B55, First Floor, Shivalik, Nueva Delhi, 1100-17, India

Tel: + 91.11.26693 763. E-mail: info@oxfamint.org.in Web: www.oxfamint.org.in

Miembro observador de Oxfam. La siguiente organización tiene condición de 'observadora' en Oxfam internacional, con vistas a una posible integración: **Fundación Rostros y Voces (México)** Alabama No. 105 (esquina con Missouri), Col. Nápoles, C.P. 03810 México, D.F. Tel/Fax: + 52 55 687 3002.

E-mail: comunicacion@rostrosyvoces.org Web: www.rostrosyvoces.org